



**NUE 29-A-2020 (LS)**  
**Hernández contra Municipalidad de Intipucá**  
**Resolución Definitiva**

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las nueve horas con ocho minutos del quince de febrero de dos mil veintiuno.

**Descripción del Caso**

I. El apelante **Gilbert Neffer Hernández Hernández** presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la **Municipalidad de Intipucá**, solicitud de acceso a información, consistente en: "1) Copia certificada de las actas de las sesiones del concejo en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019; 2) Copia digital y copia certificada de la matriz de proyecto ejecutados desde el mes de enero de 2019 hasta el mes de diciembre de 2019; y, 3.) Acceso a consulta directa de los egresos de los meses de junio de 2019 a diciembre de 2019".

En relación con ello, el oficial de información de la municipalidad resolvió para los requerimientos descritos en los números 1 y 2 del párrafo que antecede denegar el acceso a la información solicitada por tratarse de información no concretizada y no procesada para su disposición final, esto según le fue comunicado por parte de la Secretaria Municipal. En relación al requerimiento descrito en el número 3, resolvió concediéndole el acceso al apelante a la consulta directa.

Ante ello, el apelante mostró su inconformidad con lo resuelto dado que la información fue negada aduciendo su no concretización y debido a que, la consulta directa concedida le fue notificada el 14 de enero de dos mil veinte, en horas no hábiles. En ese sentido, con la finalidad de probar sus afirmaciones adjuntó a su escrito de apelación los documentos siguientes: a) impresión de captura de pantalla que refleja la notificación vía correo electrónico en donde, consta la comunicación de la consulta directa, b) copia simple



de auto en que se notifica prorroga por cinco días al plazo para dar respuesta y c) resolución en la que consta la denegatoria de entrega; documentos que forman parte del expediente administrativo remitido por la Municipalidad y que dieron inicio a este procedimiento.

**II.** El apelante interpuso el recurso de apelación ante este Instituto conforme al art. 82 de la LAIP, el cual fue admitido y asignado a la comisionada Yanira del Carmen Cortez Estévez para instruir el procedimiento; no obstante, posteriormente fue reasignado al comisionado Luis Javier Suarez Magaña para continuar con su trámite y elaborar un proyecto de resolución.

**III.** Durante la instrucción de este procedimiento, el comisionado instructor con la simple vista de la documentación que yace agregada al expediente en comento, determinó que el procedimiento quedó reducido a una cuestión de derecho, en atención a líneas resolutivas emitidas por este Instituto y de conformidad con los Arts. 102 de la LAIP y Art. 309 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), por lo que se procedió a dar por finalizada la instrucción del procedimiento a efecto de emitir la resolución correspondiente al caso.

#### **Análisis del Caso.**

El examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** procedencia del procedimiento reducido a una cuestión de derecho; **(II)** consideraciones sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP); **(III)** naturaleza de la información solicitada por apelante y la posibilidad de que esta sea entregada de conformidad al derecho de acceso a la protección de datos personales.

**I.** De conformidad a lo establecido en el Art. 163 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), en relación con el Art. 135 Inc. 3° de la misma norma, en el auto de admisión, se requirió a la partes en este procedimiento, que señalaran si ofrecieran medios probatorios que no consten en el expediente administrativo a efecto de valorar la apertura a prueba del presente procedimiento. Dicho auto fue notificado el 16 de marzo de 2020, sin que se haya recibido respuesta de las partes.

De igual forma, la jurisprudencia contencioso administrativa<sup>1</sup>, acompaña el criterio seguido por la administración pública, que cuando no se trata de controvertir hechos, sino de la aplicación del derecho al caso en particular, resulta aplicable lo establecido en el artículo 309 del CPCM, normativa supletoria aplicable de conformidad con el artículo 102 de la LAIP referido a que *"...si hubiese conformidad sobre todos los hechos y el proceso queda reducido a una cuestión de derecho, se pondrá fin a la audiencia preparatoria y se abrirá el plazo para dictar sentencia"*.

Por tanto, la Sala manifestó que la omisión de la audiencia establecida en el Art. 91 de la LAIP, en asuntos de mero derecho, no produce la vulneración del debido proceso en sus manifestaciones de los derechos de audiencia, defensa, congruencia y ausencia de motivación, de dicho artículo, y el 102 de la LAIP.

En ese orden de ideas, este Instituto se ve facultado para someter el presente procedimiento de apelación, a una cuestión de mero derecho, con base a la aplicación de normas y principios de la LAIP, así como los derechos que asisten al titular de datos personales, de conformidad con el Art. 102 de la LAIP y Art. 309 del CPCM.

II. El acceso a la información pública es un derecho constitucional implícito, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn) pero que, a pesar de ello, tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión regulado en el Art. 6 de la Cn. El derecho de acceso a la información pública comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan *interés público*. Este derecho a saber se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del estado democrático de derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a las informaciones en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública.

Asimismo, el Art. 2 de la LAIP establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás

<sup>1</sup> Sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, el 28 de enero de 2019, en el proceso de legalidad de referencia 408-2016.




entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna. Es decir que, al tenor de la citada disposición, para ejercer el derecho de acceso a la información es necesario que la información exista, haya sido generada, administrada, se encuentre en poder del ente obligado al que ha sido solicitada o que exista un mandato normativo de generarla.


El Art. 6 letra “c” de la LAIP establece que es **información pública** aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial. Para la entrega de la información, la LAIP ha diseñado un proceso expedito en el que los oficiales de información cumplen un rol importante al realizar gestiones encaminadas a satisfacer el derecho de toda persona a acceder a la información pública.


Ahora bien, es necesario tomar en cuenta que este derecho no es absoluto y es susceptible de restricciones condicionantes en su pleno ejercicio. No obstante los límites de este derecho no pueden ser arbitrarios, sino plenamente establecidos por el legislador, a efecto de prevenir que la administración pública utilice discrecionalmente argumentos encaminados a negar la información solicitada por cualquier persona.


**III.** Previo a determinar la naturaleza de la información solicitada por la parte apelante es preciso acotar que los documentos adjuntados por el apelante al escrito que dio inicio a este procedimiento consisten en copia de información contenida en el expediente administrativo relativo al trámite de su solicitud de información, por tanto, estos serán valorados como insumos contenidos en el referido expediente los cuales originaron este procedimiento.

Aclarado ello, según consta en el expediente administrativo relacionado con este procedimiento se concedió el acceso al apelante de la consulta directa del documento: “egresos de los meses de junio de 2019 a diciembre de 2019”, no así del resto de la información relativa: “copia certificada de las actas de las sesiones del concejo en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019 y copia digital y copia certificada de la matriz de

proyecto ejecutados desde el mes de enero de 2019 hasta el mes de diciembre de 2019”, debido a que las unidades administrativas correspondientes (UACI) y la Secretaría Municipal, informaron al oficial de información de la **Municipalidad de Intipucá** que la información aún no se encontraba concretizada para la ponerla a disposición del apelante, pese haber solicitado una ampliación de plazo para su entrega conforme a lo establecido en el Art. 71 de la LAIP. 

En ese sentido, la parte apelante solicitó: *“1. Copia certificada de las actas de las sesiones del concejo en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019; 2. Copia digital y copia certificada de la matriz de proyecto ejecutados desde el mes de enero de 2019 hasta el mes de diciembre de 2019; y, 3. Acceso a consulta directa de los egresos de los meses de junio de 2019 a diciembre de 2019”.* 

Al respecto, el Art. 17 de la LAIP establece: “además, de la información contenida en el artículo 10, los concejos municipales, deberán dar a conocer las ordenanzas municipales y sus proyectos, reglamentos planes municipales, fotografías, grabaciones y filmes de actos públicos; acta del concejo municipal, informes finales de auditoría, actas que levante el secretarios de la municipalidad [...]”. En ese sentido, sobre la información que fue denegada al apelante aduciendo que esta no se encontraba concretizada, además de ser de carácter público debe ser publicada por los entes obligados de manera oficiosa, es decir, para el caso de esta información el legislador previó que dado el interés público del cual está revestido la misma, esta debe ser publicada de manera oficiosa por los entes obligados a la LAIP garantizando de esta forma el debido ejercicio del derecho de acceso a la información de las y los ciudadanos. 

En ese entendido, la justificante alegada por la unidades administrativas correspondientes y plasmada por el oficial de información la solicitud objeto de conocimiento en este procedimiento para no entregar la información no es válida, en tanto, la información requerida por el apelante es de naturaleza pública-oficiosa y por tanto, compete al ente obligado realizar las gestiones internas necesarias para que esta sea de fácil acceso a la población, concretizando, la misma o procesándola de forma oportuna y eficaz sin incurrir en dilaciones indebidas que no responde a los principios establecidos en el Art. 4 de la LAIP. 



De tal forma, debió concedérsele acceso a dichos documento en el plazo de 10 días hábiles contados desde la presentación de su solicitud de información ante la UAIP del ente obligado, de conformidad a lo establecido en el Art. 71 de la LAIP. Por tanto, debe ordenarse la entrega de la certificación de las actas de las sesiones del concejo en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019 y copia digital y copia certificada de la matriz de proyectos ejecutados desde el mes de enero de 2019 hasta el mes de diciembre de 2019.

Ahora bien, en cuanto al documento consiste en: “egresos de los meses de junio de 2019 a diciembre de 2019”, es importante indicar que sobre la base de las disposiciones anteriormente citadas, también, es de naturaleza pública; asimismo, que su acceso no fue denegado por parte del ente obligado, sino por el contrario, fue concedido. No obstante el apelante, manifestó su inconformidad debido a que, la notificación por medio de la cual se hizo de conocimiento que se le concedía acceso al documento requerido fue realizada por el oficial de información de la **Municipalidad de Intipucá** en horas no hábiles y además, le limitaba a realizar la consulta únicamente en un día y hora establecida.

Sobre el particular, es preciso indicar que el Art. 63 Inc. 1° de la LAIP dispone: “el solicitante tendrá derecho a efectuar consulta directa de información pública dentro de los horarios de atención general del ente obligado”. De ese modo, la disposición en comento no habilita para restringir el acceso a la información que se pretenda consultar a una fecha específica establecida por el oficial de información de la entidad que se trate, en tanto, solo regula que esta podrá realizarse en días y horas hábiles. Es por ello, que el oficial de información no debió limitar la consulta directa a una única fecha sino infórmele al solicitante que podía ser consultada en días y horas hábiles para la Municipalidad en referencia.

En consecuencia, visto el contenido de la documentación que se encuentra incorporada en el expediente, la falta de prueba aportada distinta a la que ya se encuentra resguardada en este expediente, es oportuno ordenar la modificación de la resolución emitida por el oficial de información de la **Municipalidad de Intipucá** en el sentido, de ordenar la suministración de la información requerida por el apelante, sin más dilación ni perjuicio al derecho del solicitante por obtener información resguardada, generada o en poder de la municipalidad de manera expedita.

## **Decisión del Caso**

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas, y con base en las disposiciones legales citadas y en los Arts. 6 y 85 de la Cn., 52 inciso 3 °, 58 letras “b”, “d” y “g”, 94 y 96 letra “d” de la LAIP, este Instituto **resuelve:**

**a) Modificar** la resolución emitida por el oficial de información de la **Municipalidad de Intipucá** el 23 de enero de 2020, en los términos dispuestos en esta resolución.

**b) Ordenar** al oficial de información de la **Municipalidad de Intipucá**, que en el plazo de ocho días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, le entregue a **Gilbert Neffer Hernández Hernández** la información correspondiente a: “1. Copia certificada de las actas de las sesiones del concejo en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019; y, 2. Copia digital y copia certificada de la matriz de proyecto ejecutados desde el mes de enero de 2019 hasta el mes de diciembre de 2019; por los motivos expuestos en la presente resolución.

**c) Ordenar** al oficial de información de la **Municipalidad de Intipucá**, que en el plazo de ocho días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, le conceda a **Gilbert Neffer Hernández Hernández**, el “3. Acceso a consulta directa de los egresos de los meses de junio de 2019 a diciembre de 2019”; de conformidad a los argumentos expuestos en esta resolución.

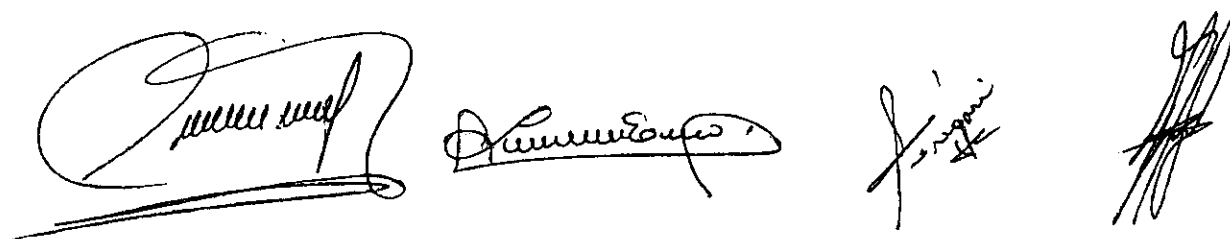
**d) Ordenar** a la **Municipalidad de Intipucá** que, por medio de su titular, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento en el que conste que se le dio trámite a la solicitud de información del apelante, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: [oficialreceptor@iaip.gob.sv](mailto:oficialreceptor@iaip.gob.sv)

**e) Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

f) Remitir el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la ejecución de esta resolución.

g) Publíquese esta resolución oportunamente.

*Notifíquese.-*



**PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA  
SUSCRIBEN**

CT/JH

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil veintiuno.

José Augusto Hernández Funes  
NOTIFICADOR  
IAIP

